



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

REGISTRO N° 641/2023

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de dos mil veintitrés, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa **CPE 163/2022/4/CFC1**, caratulada: **"GALLEA, Juan José s/recurso de casación"**; de la que **RESULTA:**

I. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, el 20 de octubre de 2022 resolvió confirmar el decisorio adoptado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Martín en tanto dispuso: *"NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad efectuados por la Dra. Carolina Schreck, en esta incidencia (art. 166 y sstes. del CPPN y art. 18 de la CN "a contrario sensu")..."*.

II. Contra esa decisión, los letrados a cargo de la defensa de Gallea interpusieron recurso de casación, el que fue denegado por el tribunal *a quo* y, ocurriendo por vía directa, fue concedido por esta Sala por mayoría (cfr. CPE 163/2022/4/RH1, Reg. 86/23, del 23 de febrero de 2023).

III. El recurrente discurrió sobre los requisitos de admisibilidad de la vía intentada, señaló que la decisión atacada resultaba infundada y, en consecuencia, arbitraria.

Añadió que el pronunciamiento adoptado lesionaba el derecho de defensa y rememoró los antecedentes relevantes del caso.

En lo medular, sostuvo que el planteo original se dirigía a la invalidez de una tabla de datos en los que los denunciantes detallaban supuestas deudas de la firma Panificadora Balcarce S.A. en relación con el sistema nacional de recursos de la seguridad social.



Expuso que aquella información, a diferencia de lo sostenido en la denuncia, no podía ser compulsada de manera libre y pública en las páginas web de la A.F.I.P. o A.N.S.E.S.

De adverso, observó que para poder relevar los aportes y las contribuciones declaradas por un contribuyente y su eventual pago se requiere contar con la correspondiente clave fiscal, a la que no tenían acceso los denunciantes.

Consecuentemente, señaló que se trata de información fabricada o bien, obtenida ilegalmente mediante el ingreso no autorizado a la información del contribuyente Panificadora Balcarce S.A.

Argumentó que no se acreditó en qué contexto los denunciantes obtuvieron esa información pese a lo cual se afirma que aquellos habrían efectuado consultas con el personal de administración y de recursos humanos de la empresa, circunstancia que no es estrictamente cierta ni se ha comprobado.

Añadió que no se pretendió la invalidez de la denuncia presentada sino de la prueba que se acompaña en sustento que, a todas luces, fue obtenida ilegalmente o bien confeccionada artificiosamente por los denunciantes.

Remarcó *"...el contenido de dicho artículo NO AVALA EL APORTE DE PRUEBA OBTENIDA DE FORMA ILEGÍTIMA O FALSA..."* y destacó que se trata de información abarcada por el secreto fiscal, por lo que su obtención debe limitarse a los supuestos expresamente previstos en la ley.

También indicó que *"...debe analizarse de forma debida el caso particular, pues más allá de que existan "fuentes independientes" o se haya solicitado "a la Administración Federal de Ingresos Públicos la confección de un informe con los datos de interés para el objeto procesal", lo cierto es que la "tabla" cuestionada por esta parte seguirá glosada al expediente y será utilizada como "prueba" en perjuicio de nuestro defendido..."*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

Por otra parte, indicó que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín omitió considerar que la aquiescencia de la pervivencia de la prueba ilegalmente obtenida en la causa es violatoria del derecho de defensa y del debido proceso.

Finalmente, formuló reserva del caso federal.

IV. En la oportunidad prevista por el art. 465 *bis* -en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. (según ley 26.374)- y fijada la audiencia en esta sede, se presentó la defensa del recurrente y acompañó breves notas.

V. Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.

El señor juez **Javier Carbajo** dijo:

I. En orden a la admisibilidad, debe estarse a lo resuelto mayoritariamente por esta Sala IV el 23 de febrero de 2023 al momento de examinar el recurso de queja intentado por la defensa de Juan José Gallea (Reg. 86/23).

II. Liminariamente, corresponde memorar los antecedentes relevantes del caso.

En la etapa temprana, la defensa planteó la nulidad de la incorporación al proceso de la tabla ofrecida como prueba por los denunciados, en la que se detallaban los aportes del sistema de seguridad social que, presuntamente, la firma Panificadora Balcarce S.A. no había ingresado pese a estar obligada a ello.

Explicó que tal información no era de acceso público y que su obtención podía vulnerar el secreto fiscal, pues no podía haberle sido entregada personalmente a los denunciados.

Cuestionó que aquellos hubieran afirmado en su denuncia que la misma había sido obtenida mediante la compulsión de la página web de la AFIP y de la ANSES cuando ello, a su ver, es manifiestamente falso pues



tales datos no obran en esos portales de manera abierta al público en general.

Expuso que dicha información solo puede adquirirse mediante el uso de la correspondiente clave fiscal de la persona jurídica contribuyente, lo que abría el panorama a preguntarse si no había sido extraída ilegalmente mediante la vulneración del secreto fiscal o bien el uso no autorizado de la clave fiscal.

Señaló que la prueba ilegalmente conseguida debe ser excluida de la causa y, junto a ella, toda otra que se hubiera podido recabar como consecuencia de su análisis o examen.

Recordó diversos precedentes del Máximo Tribunal que excluían el uso de la prueba ilegalmente obtenida y destacó que se trataba de información privada de la persona de existencia ideal que debe ser protegida y tutelada.

El 15 de septiembre de 2022, el señor juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Martín rechazó el planteo.

El magistrado recordó el carácter restrictivo y excepcional que rige en materia de nulidades. Manifestó que en el caso no se verificaban irregularidades manifiestas en torno a la prueba cuestionada.

Subrayó que la información en cuestión podía ser obtenida *"...tras la compulsa efectuada ante la ANSES por los propios denunciantes..."* y que ello impedía invalidar la denuncia y todo lo actuado en consecuencia.

Indicó que no se observaba un gravamen irreparable derivado de la alegada vulneración de la información de la persona jurídica que justificara la pretendida nulidad.

Concluyó en *"...la posibilidad de que aquellos puedan conocer sobre la deuda denunciada [pues] existió desde ese preciso momento en que realizaron a través de la ANSES y/o AFIP, la compulsa respectiva..."*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

Recurrida aquella decisión, los colegas de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmaron el auto apelado, decisión que ahora se impugna.

Para así decidir consideraron, en primer término, que el temperamento adoptado por el juez de grado contaba con fundamentos mínimos y suficientes por lo que las críticas dirigidas en punto a su arbitrariedad resultaban insuficientes para su descalificación como acto jurisdiccional válido.

De seguido, rememoraron el carácter restrictivo vigente en materia de nulidades y destacaron que la parte no había acreditado si los datos *"...fueron directamente extraídos o no de los registros de los organismos del Estado Nacional y si se corresponden o no con los propios de esos entes estatales..."*.

Añadieron que la defensa no había ponderado la posibilidad de que los denunciante hubieran efectuado consultas con el personal de administración y de recursos humanos de la empresa Panificadora Balcarce S.A. y ellos hubieran brindado tal información.

Remarcaron que *"...suprimiéndose los datos del cuadro objeto del planteo de nulidad, las restantes aseveraciones de la denuncia contienen los recaudos que demanda el artículo 176 del CPPN..."* y continuaron aseverando que la invalidez de la tabla acompañada como prueba en nada enervaba la denuncia postulada por los empleados de la firma.

III. Sentado lo expuesto, advierto que la decisión atacada no atendió, con argumentos adecuados y suficientes, los planteos que desde la instancia de origen traía la parte impugnante.

En efecto, en el fallo que ahora toca analizar no se ha dado una respuesta acabada a si la información detallada en el cuadro aludido, cuya validez se puso en tela de juicio, puede ser obtenida mediante una compulsa libre del sistema de la página



web de la A.F.I.P. o A.N.S.E.S. Que este agravio fue y es insistentemente alegado por la defensa al cuestionar su incorporación al legajo.

Es que, como se alega, frente al escenario planteado en autos, al menos a esa altura de la investigación y con los datos que a ese entonces se contaban, se podría tratar de información de la contribuyente alcanzada por las previsiones del secreto fiscal.

En ese orden, la defensa alude -y aquí lo sigue reiterando- que aquel cuadro, que no estaría conformado por la mera composición de los montos que los empleados pudieron haber obtenido de la compulsa personal de sus aportes, solo se pudo haber obtenido accediendo a la clave fiscal de la firma por sí o por terceros autorizados por aquella, mediando levantamiento en los supuestos legales establecidos del secreto fiscal o, bien, verificándose su quebrantamiento.

De tal guisa, las sospechas planteadas en punto a su obtención ilegal o a su confección irregular ameritan una evaluación pormenorizada y rigurosa de aquella planilla como medio de prueba.

Ello no obsta a que se examine, por un lado, la regularidad de aquella tabla presentada por los denunciantes como prueba para sustentar su denuncia y, por el otro, los alcances que de esa presunta invalidez pueden derivarse en la suerte del proceso.

Más aun, tampoco se ha dotado al pronunciamiento recurrido de fundamentos suficientes para evaluar que la denuncia pueda subsistir con prescindencia de aquel elemento y que la investigación pueda ser reconducida -según el caso- en tales condiciones con la información restante volcada en la presentación que dio inicio a las actuaciones.

A partir de lo expuesto, los extremos considerados en la resolución impugnada lucen insuficientes para descartar la posibilidad de que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

desglose el señalado elemento de prueba, tal como solicitó la parte en su planteo.

Y si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos (cfr. Fallos: 221:37), el examen llevado a cabo en los pronunciamientos, tanto en la instancia de origen como en su réplica ante el *a quo*, ha sido parcial y fragmentario, excluyéndose un agravio oportunamente introducido por la defensa y que debía ser atendido por la jurisdicción desde que aparecía conducente para la prosecución del pleito (cfr. doctrina de Fallos: 212:561 y, más reciente, 339:405 341:1443), todo lo cual torna en arbitraria la decisión por su aparente fundamentación, en contra de la exigencia prevista por el art. 123 CPPN. para los autos jurisdiccionales.

IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, ANULAR la decisión impugnada y REENVIAR al tribunal *a quo* a sus efectos, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

Que por compartir en lo sustancial las consideraciones expuestas en el voto del distinguido colega que abre el Acuerdo, doctor Javier Carbajo, adhiero a la solución que propone. Ello, en la medida que el tribunal de la instancia previa omitió dar un tratamiento cabal al planteo efectuado por la parte impugnante, circunstancia que revela la arbitrariedad de la decisión a estudio.

El **señor juez doctor Gustavo M. Hornos** dijo:

El juicio sobre la admisibilidad formal del recurso de casación en estudio efectuado por el *a quo*, es de carácter provisorio, ya que esta Cámara de Casación resulta competente para definir, de manera previa al análisis del fondo del asunto, si la cuestión sometida a estudio puede ser discutida en



esta sede y en esta oportunidad, pudiendo emitir un juicio definitivo sobre dicho extremo, aun con posterioridad a la celebración de la audiencia de informes (cfr. Sala IV, C.F.C.P.: causa n° 1178/2013, "ALSOGARAY, María Julia s/ recurso de casación", reg. n° 641.14.4 del 23/04/2014; causa CFP 1738/2000/T01/2/CFC1, "BIGNOLI, Santiago María; BIGNOLI, Arturo Juan y Oficina Anticorrupción s/incidente de prescripción de acción penal", reg. n° 1312.14.4 del 27/06/2014; causa n° 1260/2013, "RIOS, Héctor Geremías s/ recurso de casación", reg. n° 695.15.4 del 20/04/2015; causa FSA 74000069/2007/T01/CFC1, "OJEDA VILLANUEVA, Néstor Alfredo s/recurso de casación", reg. n° 1111.15.4 del 09/06/2015; causa FRE 16000008/2012/11/CFC7, "MAZZONI ROBERTO DOMINGO y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos art. 248, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes e infracción art. 144, ter 2° párrafo – según ley 14.616. Querellante: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco y otros", reg. N° 1462/16, rta. 15/11/2016; y causa FRE 5797/2016/7/CFC1 "PÉREZ WALTER HERNÁN s/ recurso de casación", reg. 544/18, rta. 28/05/18, entre muchas otras).

En oportunidad de resolver el recurso presentado por los letrados a cargo de la defensa de Juan José Gallea por vía directa en función del rechazo del recurso de casación que fuera denegado por el tribunal *a quo*, adelanté que, sellada como se encontraba la suerte de la queja en virtud del voto de mis colegas que hacía lugar al remedio interpuesto, declarándolo erróneamente denegado, me pronunciaría al momento de resolver sobre el fondo del asunto (cfr. CPE 163/2022/4/RH1, rta. el 23 de febrero de 2023, Reg. Nro. 86/23.4).

Ahora bien, como regla general, el rechazo de una nulidad no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., en tanto no pone fin a la acción, a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Tampoco la parte recurrente alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el Tribunal *a quo*, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara (Fallos: 328:1108) (cfr. de esta Sala IV: Causa Nro. 14968 "HAUPT, Gustavo Adrián s/ recurso de queja", Reg. Nro. 1653/12, resuelta el 17/09/12, Causa Nro. 13.398 "YAMAGISHI, Yoshitaka s/ recurso de queja", Reg. Nro. 413/12, resuelta el 29 de marzo de 2012, causa Nro. 13.484 "SANCHEZ, Ema Cristina s/ recurso de queja", Reg. Nro. 415/12, resuelta el 29/03/2012, causa Nro. 13.374 "BERTONE, Luis Alejandro s/ recurso de queja", Reg. Nro. 416/12, resuelta el 29/03/2012 y causa Nro. 13.225 "SIMMERMACHER, Jorge Augusto Carlos y otra s/ recurso de queja", resuelta el 11 de abril de 2012 y registrada bajo el número 497/12).

En el pronunciamiento recurrido, el tribunal *a quo* ha asentado su criterio en relación a que la regla general es la validez de los actos, en los supuestos que no se comprueben las causales restrictivas para la declaración de ineficacia, que se demuestre que no media un perjuicio concreto para alguna de las partes o no se vean menoscabados los derechos y garantías con jerarquía constitucional, con la finalidad de evitar declarar la nulidad debido al sólo interés de la vigencia de la ley, cuando no se demuestran desmedros de las prerrogativas fundamentales.

En tal dirección, cabe tener presente que en el caso de autos, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, al confirmar el rechazo del planteo de nulidad de la prueba aportada por los denunciantes (que contenía la "tabla" con las supuestas deudas de la firma Panificadora Balcarce



10
S.A.), y de todos los actos que en consecuencia se efectuaron, han considerado que no se ha acreditado cómo y en qué contexto dichos trabajadores obtuvieron los datos plasmados en la tabla cuestionada, si fueron directamente extraídos o no de los registros de los organismos del Estado Nacional y si se corresponden o no con los propios de esos entes estatales.

A su vez, han ponderado que los apelantes no evaluaron la circunstancia acerca de que los denunciantes habrían efectuado consultas con el personal de administración y de recursos humanos de la empresa Panificadora Balcarce S.A.; concluyendo al respecto que *"tampoco podemos descartar la posibilidad de que integrantes de la firma, pertenecientes a las áreas que podrían manejar los datos cuestionados, hayan sido los que los hayan proporcionado y, en su caso, no sabemos si ellos tenían o no autorización para el uso de la clave fiscal del ente ideal"*.

También, sustancialmente han concluido que *"...suprimiéndose los datos del cuadro objeto del planteo de nulidad, las restantes aseveraciones de la denuncia contienen los recaudos que demanda el artículo 176 del CPPN, suficientes por sí solos para iniciar una investigación relativa sobre la presunta evasión de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y/o, una presunta apropiación indebida de aquéllos, por parte de los responsables de la firma aludida"*.

Y previamente, en similar sentido, ha señalado el juez federal de primera instancia que no puede soslayarse el conocimiento por parte de los denunciantes del presunto hecho ilícito aquí investigado, a través de la consulta de sus aportes en línea, contrarrestando los recibos de sueldo del mes de enero 2022 -por ellos aportados- donde se visualiza que efectivamente se habían efectuado los descuentos pertinentes en concepto de cargas sociales; coligiendo al respecto que la posibilidad de que aquéllos puedan conocer sobre la deuda denunciada existió desde ese





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CPE 163/2022/4/CFC1

preciso momento en que realizaron a través de la ANSES y/o AFIP la compulsa respectiva.

Es entonces el debate oral, público y contradictorio donde se ponen en discusión las garantías de defensa en juicio y debido proceso alegadas y el escenario propicio para el análisis y examen entre las partes sobre las circunstancias fácticas vinculadas con la violación de los derechos invocados.

Por ello, propongo al acuerdo declarar inadmisibile el recurso de casación, sin costas ante esta instancia (arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría **RESUELVE:**

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, **ANULAR** la decisión impugnada y **REENVIAR** al tribunal a *quo* a sus efectos, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.

